



ASAMBLEA DE MADRID

A LA MESA DE LA ASAMBLEA DE MADRID

D. Héctor Tejero Franco, Diputado del Grupo Parlamentario Más Madrid de la Asamblea de Madrid, al amparo de lo dispuesto en los artículos 205 y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate ante el **Pleno de la Asamblea**

Madrid, 6 de abril de 2022

Dña. Mónica García

La Portavoz

D. Héctor Tejero Franco

El diputado

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La crisis climática, causada por la emisión de gases de efecto invernadero derivada, en gran medida, de la combustión de combustibles fósiles, es el principal reto al que se enfrentan nuestras sociedades y que condicionará nuestro futuro por décadas. La cuestión esencial para enfrentar la crisis climática es reducir lo antes posible a cero las emisiones netas de estos gases que alteran el clima.

La reciente publicación, el pasado 4 de abril, de la tercera y última parte del nuevo informe del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) que recoge la mejor ciencia disponible sobre el cambio climático establece que necesitamos actuar cuanto antes para asegurar un futuro justo en un planeta habitable y, al mismo tiempo, confirma que estamos lejos de hacer lo suficiente. Con las políticas globales actuales nos dirigimos a un calentamiento global superior a los +3°C sobre la temperatura preindustrial, que nos depararía un mundo más inseguro, hostil y conflictivo. Esta cifra está muy por encima de los umbrales de 1.5°C o 2°C acordados internacionalmente en 2015 en París y que exigen, según este nuevo informe, alcanzar el pico de emisiones antes de 2025 y reducirlas en un 43% para 2030.

La reducción de los gases de efecto invernadero es un objetivo central recogido en diferentes estrategias y directivas europeas de lucha contra el cambio climático así como en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que, en su artículo 3, establece que para 2030 debemos reducir al menos un 23% las emisiones respecto a 1990 y 74% de la electricidad debe provenir de fuentes renovables.

Además, la reciente invasión de Ucrania ordenada por Vladimir Putin ha puesto de manifiesto que reducir la dependencia de nuestras sociedades de los combustibles fósiles, en gran medida importados, es un requisito para que la Unión Europea pueda ejercer un papel clave en la defensa de los derechos humanos, la justicia social y la sostenibilidad ecológica en el mundo.

Una parte crucial de la transición energética pasa por aumentar nuestra capacidad de producir electricidad barata impulsando la implantación de instalaciones renovables de producción eólica o fotovoltaica. Pero la transición energética no sólo debe suponer un mero

cambio tecnológico en la manera de producir electricidad, sino más bien, una oportunidad para cambiar el modelo energético actual. Hemos de aprovechar esta oportunidad para pasar de un modelo basado en el oligopolio de unos pocos grupos empresariales que controlan los diferentes ámbitos del mercado eléctrico y que, por tanto, tienen poder directo e indirecto para fijar las disponibilidades de energía en cada momento y su precio, logrando así beneficios desorbitados en detrimento de las familias, las personas trabajadoras y el conjunto del tejido productivo y empresarial, y articular un modelo energético distribuido, que incorpore la producción descentralizada, cercana a los puntos de consumo, y participada ampliamente por la ciudadanía y las empresas del tejido productivo.

Por todo ello, las autoridades y la sociedad española en su conjunto hemos de impulsar decididamente el autoconsumo y las comunidades energéticas que, además de suponer una fuente de producción de electricidad rentable y eficiente, suponen una democratización de nuestro sistema energético permitiendo a la ciudadanía participar no sólo como consumidores sino también como productores, poniendo a la ciudadanía en el centro de la transición energética, tal y como recomienda la Unión Europea. La participación activa de la ciudadanía en la transición energética a través del autoconsumo y las comunidades ciudadanas de energía es crucial, porque permite una mayor aceptación local de las energías renovables y garantiza que sus beneficios económicos y el empleo reviertan al territorio, los municipios y empresas locales en vez de quedar limitadas a unas pocas grandes empresas sin arraigo territorial.

La legislación europea ha hecho hincapié en la necesidad imperiosa de mayor participación de la ciudadanía en el sistema energético a través de las figuras de las **comunidades de energías renovables (CER)**, establecida en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y el Consejo del 11 de diciembre de 2018 y, posteriormente a través de la figura de las **comunidades ciudadanas de energía (CCE)** regulada en la Directiva (UE) 2019/44 del Parlamento Europeo y el Consejo del 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. Esta última directiva obliga a los Estados Miembros de la Unión a ofrecer un marco jurídico favorable a las Comunidades de Energías Renovables y Comunidades Ciudadanas de Energía.

Las Comunidades de Energías Renovables y Comunidades Ciudadanas de Energía son herramientas importantes para avanzar en una transición energética justa y democrática, impulsando de manera participativa no sólo instalaciones de generación de electricidad renovable compartidas, sino estableciendo estrategias compartidas de ahorro, eficiencia energética y movilidad sostenible, o sistemas de energía renovable térmica. El carácter local de estas comunidades genera también la fijación de nuevos empleos en la zona.

Sin embargo, a día de hoy, la trasposición de estas directivas europeas al ordenamiento jurídico español aún resulta incompleta, ya que ni las comunidades ciudadanas de energía ni el marco jurídico favorable se han regulado en la normativa española. El Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, dió un primer paso al incluir una definición de las Comunidades de Energías Renovables pero sin decir nada de los derechos de las mismas, de su marco favorecedor ni de ningún aspecto referido a las Comunidades Ciudadanas de Energía. Es decir, nos encontramos en una situación de incumplimiento del Gobierno español de la normativa europea, manteniendo una transposición parcial e incompleta de la normativa comunitaria en materia de comunidades energéticas, que claramente perjudica la transición energética -dificultándola y limitándola- así como la soberanía energética de la ciudadanía -al impedir su participación y la democratización de la energía.

A pesar de que la principal responsabilidad normativa está hoy en día en manos del Gobierno de España hay muchas cosas que la Comunidad de Madrid puede hacer para impulsar las Comunidades de Energías Renovables y Comunidades Ciudadanas de Energía en el marco de sus competencias. En primer lugar puede garantizar que las instalaciones renovables existentes o que se vayan a desplegar en los próximos años en terrenos o edificios públicos (colegios, hospitales, etc) se hagan bajo la forma de Comunidades de Energías Renovables o Comunidades Ciudadanas de Energía , impulsando procesos participativos de cercanía para sumar a la ciudadanía a las mismas. En segundo lugar puede establecer líneas de ayudas financieras específicamente dirigidas a la constitución de Comunidades de Energías Renovables y Comunidades Ciudadanas de Energía cooperativas y privadas bien a través de particulares, asociaciones o pequeñas y medianas empresas o incluso pequeños municipios. Este proceso puede ir acompañado de campañas de asesoramiento, publicitarias y una ventanilla única digital que informe a la ciudadanía y a los

actores sociales de la región. Además, la Comunidad de Madrid debe apoyar a través de una Oficina presencial itinerante a los pequeños municipios que, al tener menos recursos financieros y humanos, tengan más complicado impulsar las Comunidades de Energías Renovables y Comunidades Ciudadanas de Energía.

Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario Más Madrid propone la siguiente:

PROPOSICIÓN NO DE LEY

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que inste al Gobierno de España a:

1. Transponer de forma inmediata y completa la Directiva (UE) 2019/44 del Parlamento Europeo y el Consejo del 5 de junio de 2019 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad que defina jurídicamente las comunidades ciudadanas de energía y establezca un marco jurídico favorable para el desarrollo de las comunidades de energías renovables y de las comunidades ciudadanas de energía.
2. Considerar, en dicho marco jurídico, como instalaciones de producción próxima, en el marco de las comunidades de energía renovable o comunidades ciudadanas de energía, aquellas instalaciones de potencia inferior a 5 MW conectadas, en generación y consumo, en tensión inferior a 36 kV, a distancia inferior de 5.000 metros. Asimismo, estudiar la posibilidad de ampliar esa distancia hasta los 20.000 metros en los entornos rurales o con menor densidad de población.
3. Modificar lo establecido en la Orden TED/1247/2021, en lo relativo al reparto de la energía de una instalación de autoconsumo compartido, permitiendo coeficientes de reparto dinámicos 'a posteriori', en lugar de estáticos por franjas horarias 'ex ante' como es actualmente, y habilitar un mecanismo a través de las empresas distribuidoras de zona para permitir la compensación de la energía compartida directamente en las facturas eléctricas.

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a poner en marcha en el presente ejercicio presupuestario las siguientes medidas:

1. Impulsar un marco normativo que obligue a que todas las instalaciones renovables existentes, y que se establezcan a partir de ahora, en edificios públicos de la Comunidad de Madrid deban iniciar los procesos legales y participativos necesarios para constituirse como Comunidades de Energías Renovables o Comunidades Ciudadanas de Energía, siempre y cuando sea técnicamente posible.
2. Establecer líneas de ayudas específicas para la constitución de Comunidades Ciudadanas de Energía y Comunidades de Energía Renovable a particulares y municipios de la región.
3. Lanzar una campaña de asesoría ciudadana para incentivar el establecimiento de Comunidades Ciudadanas de Energía y Comunidades de Energía Renovable incluyendo una ventanilla digital única.
4. Establecer una Oficina presencial itinerante para incentivar la formación de Comunidades Ciudadanas de Energía y Comunidades de Energía Renovable a nivel local en los municipios de menos de 5000 habitantes y una línea de asesoramiento directo permanente a los municipios y entidades locales interesados en poner en marcha Comunidades Energéticas con participación de la ciudadanía.